



Colombia: el mito de la democracia perfecta

24 de marzo 2022

Por: Héctor Galeano David
Analista Político Internacional
Miembro de Vamos por los Derechos Internacional

Enclavado en un contexto regional, en el cual los golpes de Estado se convirtieron en la herramienta preferida de los EE. UU. para mantener el poder hegemónico, Colombia, se erige como el “alumno ejemplar” de la democracia y la libertad. No es para menos, en el imaginario popular, la democracia se circunscribe como la oportunidad que tienen los ciudadanos de participar en un proceso de elección mediante su voto.

Con excepción del periodo comprendido entre 1953-1957, el país siempre ha mantenido las urnas abiertas y el ejercicio electoral se ha enmarcado en los cánones que occidente considera como una democracia liberal.

No obstante, al revisar la historia y la coyuntura actual, el concepto de Colombia como país democrático, no pasa de ser un mito en el cual la historiografía queda con una deuda monumental, ya que solo muestra la versión de una corrupta élite política y económica que desde 1886, se atornilló en el poder.

Luego del triunfo conservador y la inmediata promulgación de la Constitución Política de 1886, se inicia la hegemonía de un partido que llevó al país a un conflicto fratricida conocido como la Guerra de los Mil Días. Una sangrienta guerra intestina, que ratificó el dominio conservador y marcó el inicio de una práctica que será desarrollada a lo largo del Siglo XX y continua hoy vigente: el asesinato sistemático de los contradictores políticos.

De esa manera actuó el gobierno de José Vicente Concha, al permitir el asesinato del líder liberal Rafael Uribe Uribe en 1914. Casualmente, el general que había firmado la paz y confiado en el gobierno, llevaba consigo un proyecto de ley que favorecería a los trabajadores.

Como un verdadero Déjà vu, la historia se repite cíclicamente. Es así como los magnicidios se convirtieron en un instrumento para acallar las voces de los opositores, especialmente aquellos que confiaron en el Estado colombiano y en esa entelequia llamada democracia.

Desde 1948 los asesinatos políticos se convirtieron en la herramienta más utilizada. Algunos mártires de esa “democracia” son:

- Jorge Eliecer Gaitán, abogado liberal asesinado en 1948
- Jaime Pardo Leal, miembro de la Unión Patriótica, asesinado en 1987
- Luis Carlos Galán, fundador del Nuevo Liberalismo, asesinado en 1989
- José Antequera, miembro de la Unión Patriótica, asesinado en 1989
- Carlos Pizarro Leongómez, desmovilizado del M19, asesinado en 1990
- Bernardo Jaramillo Ossa, dirigente del Partido Comunista Colombiano, asesinado en 1990
- Manuel Cepeda, dirigente de la Unión Patriótica, asesinado en 1994
- Álvaro Gómez Hurtado, dirigente conservador y Copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, asesinado en 1995

De igual manera, esa estrategia de sangre y muerte, se extendió a los más vulnerables. Esa parte de la sociedad abandonada por el Estado, que presionada por los paramilitares es desplazada, asesinada o en el mejor de los casos, obligada a votar por candidatos que representaban al narco paramilitarismo.

De hecho, como lo registró el diario El Tiempo en abril de 2008, cincuenta y un congresistas fueron vinculados a las investigaciones por parapolítica. Todos, claramente vinculados a las dos campañas del hoy imputado señor Álvaro Uribe Vélez.

En ese escenario absolutamente contrario a los más básicos principios democráticos, los clanes políticos departamentales y regionales, se posicionaron como los operadores políticos de los narcoparamilitares. No obstante que la gran mayoría de los jefes de las autodefensas fueron extraditados por el imputado expresidente, el poder de esos clanes les sigue permitiendo llevar a las alcaldías y gobernaciones a miembros de su grupo.

La coyuntura actual, solo se puede catalogar como la “tormenta perfecta” contra una débil y socavada democracia.

Por una parte, el narcoparamilitarismo ha ganado terreno. El informe de Indepaz -Los focos del conflicto en Colombia. Informe sobre presencia de grupos armados-, registra un aumento de la actividad de los grupos criminales. En 2020 fueron 291 municipios y 27 departamentos los afectados, lo que refleja como lo señala el informe “tiene como factor relevante las agresiones contra la población civil como expresiones de control territorial en el marco de la pandemia de COVID-19. Allí, mediante amenazas, se impusieron controles a la circulación y en general, se dio una regulación de la vida social”, todo enmarcado en un proceso de constreñimiento electoral, lo que garantiza la elección de los candidatos cercanos a la extrema derecha.

Segundo, una concentración de poder en el ejecutivo, que viola el más sacro principio de equilibrio de poder mediante el cual, se impide que la figura presidencial tenga contrapesos que le prohíban soslayar la Constitución y las leyes.

En el espectro político actual, todos los órganos de control -Registraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Procuraduría- trabajan de manera asociada con Iván Duque y la coalición de gobierno. En otras palabras, la nación queda inerte ante los abusos del poder que se practican con frecuencia desde la Casa de Nariño. El mejor ejemplo, fue el pronunciamiento de Duque y el registrador nacional, mediante la cual pretendían recontar los votos, luego de terminada la cadena de custodia a los tarjetones electorales.

Tercero, las masacres y asesinatos selectivos, se incrementaron desde la llegada de Duque. Con base en Indepaz, en 2021 se ejecutaron 96 masacres y en lo corrido de 2022, ya van 22. Cabe recordar, que el partido de gobierno, ha sido enemigo acérrimo del proceso de paz, por lo que dentro de sus perversas estrategias, está el desamparo a los desmovilizados que firmaron el acuerdo de La Habana. De hecho, el diario El Nuevo Siglo, (15 de marzo 2022), muy cercano al gobierno, se vio precisado a reconocer que ya han sido asesinados 285 desmovilizados. El dantesco escenario se hace más dramático, al conocer que en 2022, han asesinado a 17 líderes y líderes sociales – El Espectador febrero 2022 -

En ese orden de ideas, hablar de Colombia como la democracia más estable de América Latina, solo cuenta la versión de un estamento corrupto, que permitió que por lo menos 6402 jóvenes fueran asesinados por las balas del ejército. Es desconocer que ese gobierno que desprecia la paz y con ello, la verdad, la justicia y la reparación, sigue dispuesto a inundar el territorio de sangre, con el propósito de mantenerse en el poder.

En conclusión, un gobierno para el que una democracia solo consiste en el ejercicio del voto, así el ciudadano vaya acompañado de su cédula y una arma apuntando a su cabeza.